

plo de que luchar por la sostenibilidad y por la economía verde no es querido por algunos grupos que tienen más interés en la explotación del petróleo.

El desarrollo sostenible no es más un concepto voluntario. No es un debate técnico. No se trata de bombillas de bajo consumo o ir en bici a trabajar. Es política. Para millones de personas se trata de la vida o la muerte, vivir con dignidad o en condiciones miserables. El desarrollo sostenible es un tema altamente político, que tiene que ver con grandes luchas de poder e intereses económicos (a corto plazo). Es el momento de tomárnoslo en serio.

Leida Rijnhout es directora ejecutiva de la organización internacional ANPED (Alianza del Norte para la Sostenibilidad)

Traducción: Iñaki Barcena



2. Río+20: Entre el capitalismo verde y el decrecimiento sostenible

Directos al precipicio, más que nunca

Daniel Tanuro

Veinte años después de la primera Cumbre de la Tierra, la ONU volvió a Río para una nueva conferencia bajo el signo de la “economía verde”. Bajo el título “El futuro que queremos”, el proyecto de resolución no levanta acta de ningún balance de las decisiones adoptadas en 1992. En cuanto a las perspectivas, la propaganda oficial nos quiere hacer creer que combinan el respeto por las limitaciones ambientales y la justicia social... Los textos muestran un proyecto totalmente diferente: la ayuda masiva a las empresas para acaparar y saquear aún más sistemáticamente los recursos naturales, a expensas de la sociedad. Inspirado sobre todo por el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía, “El futuro que queremos” es un documento radicalmente ultraliberal.

Implica una mayor austeridad, miseria y desigualdad social, y una peligrosa escalada de la degradación ambiental. Una doble observación que refuerza la urgencia del combate ecosocialista.

Una buena manera de escamotear el balance de una política es alinear los aspectos positivos y negativos alternativamente, dejándolo en la vaguedad y sin la integración de las dos dimensiones. En este viejo truco manido es el que se utiliza en el proyecto de resolución de Río+20. Se dice en el párrafo 10 que *“en los veinte años transcurridos desde la Cumbre de la Tierra en el año 1992, se registraron avances y cambios”*, y agrega a continuación que *“el desarrollo insostenible ha aumentado la presión sobre los limitados recursos naturales de la Tierra”*. Como si pudiéramos acercarnos a la meta, cuando nos estamos alejando. En la versión final, este tejemaneje ha sido sustituido por una fórmula más coherente, pero aún así plantea: *“Reconocemos que los progresos realizados en los 20 últimos años han sido desiguales”*.

Ya que la ONU no evalúa sus decisiones, vamos a hacerlo nosotros mismos. La cumbre de 1992 aprobó principalmente la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de donde salió a duras penas el Protocolo de Kioto. Dos años antes fue formado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El cuarto informe (2007) de este organismo confirmó los anteriores: para que la temperatura de la superficie de la Tierra no supere un aumento de dos grados centígrados en comparación con 1780, las emisiones de gases de efecto invernadero deben comenzar a disminuir, como más tarde, en el año 2015, para disminuir durante cuarenta años del 50 a 85% en todo el mundo, y del 80 al 95% en los países desarrollados, en comparación con 1990. (En realidad, sería prudente optar por la parte superior de estas horquillas, ya que el calentamiento avanza más rápido que lo indicado por los modelos).

Ningún objetivo real de reducción de emisiones

¿Todavía hay que demostrar que no avanzamos en este sentido? En general, sumados todos los gases, las emisiones han crecido por lo menos el 25% en veinte años. Además, su ritmo de crecimiento anual se ha triplicado, llegando al 3% después del año 2000 (3,4% en 2011). Los objetivos más que simbólicos de Kioto ni siquiera se respetan. Para atajar el calentamiento global, se necesita con urgencia un nuevo acuerdo internacional vinculante, proactivo y solidario, teniendo debidamente en cuenta el principio (consagrado en la Convención) de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, de los diversos países y grupos de países. Sin embargo, la creciente competencia intercapitalista, sobre todo desde la crisis financiera de 2008, hace que la conclusión sea más que dudosa.

La Cumbre de Copenhague del 2009 fue un rotundo fracaso. Las de Cancún y Durban, en 2010 y 2011, no han hecho más que tomar nota de una lista

de buenas intenciones haciendo hincapié en las pseudo-soluciones liberales basadas en la creación de un mercado del carbono. Resultado: ya no es posible permanecer por debajo de un aumento de la temperatura de dos grados centígrados. Sobre la base de las promesas de los Estados (a condición de que sean respetados), la tendencia es, en realidad, llegar a un calentamiento de entre 3,5 y 4 grados centígrados, o más, a finales del siglo. Lo que se está produciendo no es un cambio climático, sino un vuelco climático. Y tendrá consecuencias graves e irreversibles sobre el nivel de los océanos, la productividad agrícola, los suministros de agua, la biodiversidad, la salud... Cientos de millones de personas sufrirán las consecuencias, sobre todo los pobres de los países pobres.

Frente a esta amenaza sin precedentes, el párrafo 70 del proyecto de resolución es el único que propone objetivos numéricos y plazos. Dice: *“Nos proponemos mejorar la eficiencia energética a todos los niveles para duplicar su tasa de crecimiento anual hasta el 2030 y doblar la cuota de energías renovables en el mix energético para el año 2030”*. Escenarios tomados de la Agencia Internacional de la Energía, estos objetivos relativos no son garantía, por supuesto, de una reducción absoluta de las emisiones mundiales del 50 al 80%. Todo depende de la evolución de la demanda de energía. Por tanto, como estos objetivos marcados son muy constringentes a los ojos de los gobiernos, la resolución final se contenta diciendo: *“Lo importante es hacer un uso racional de la energía y aumentar la cuota de las energías renovables, de las tecnologías menos contaminantes y de las técnicas de alto rendimiento energético”*. La fórmula es vaga y sin embargo contiene dos amenazas muy precisas, pues la expresión *“tecnologías menos contaminantes”* hace referencia de hecho a la energía nuclear y al denominado *“carbón limpio”* con la captura o secuestro del carbono.

¿Economía Verde?

La resolución *«advierde con notable preocupación la importante distancia entre los efectos combinados de los compromisos tomados por las partes (...) y las tendencias acumuladas de las emisiones»*... pero no saca ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque la preocupación de la cumbre no es *“erradicar la pobreza en el marco de un desarrollo sostenible”*, como dice la propaganda de la ONU. Sino que se trata de abrir oportunidades a la gran cantidad de capitales excedentarios que pululan, como buitres por el cielo, en busca de ganancias. La especulación sobre las monedas, sobre las deudas y las materias primas ya no es suficiente para satisfacer su apetito. Los grandes grupos apuestan cada vez más por la industria verde y por la transformación de los recursos naturales en mercancías. Vender los bienes y servicios que la naturaleza nos proporciona - convertir esos valores de uso en valores de cambio- es su objetivo.

Es en este contexto donde surgió el nuevo concepto de moda: la llamada “*economía verde*”. Su definición es tan nebulosa/¹ que algunos creen que es una nueva etiqueta en la vieja botella del desarrollo sostenible. Error. Como señala el informe que el PNUMA publicó para Río +20, “*el concepto no pretende sustituir al de desarrollo sostenible, sin embargo cada vez más se reconoce que el logro del desarrollo sostenible depende casi en su totalidad de un buen enfoque económico (...). El desarrollo sostenible sigue siendo un importante objetivo a largo plazo, pero para llegar a él es necesario ‘reverdecer’ la economía*”/².

En otras palabras, la insostenibilidad del desarrollo no se debe a la superación de los límites ecológicos: es simplemente resultado de que los empresarios no entienden la necesidad de adoptar “*un buen enfoque económico*”. En lugar de perder el tiempo en buscar “*compromisos*” entre lo social, lo ambiental y lo económico - según recomienda el “*desarrollo sostenible*” - es suficiente centrarse en la economía, hacerla verde y el resto vendrá dado “*casi en su totalidad*”. El PNUMA lo escribe, blanco sobre negro: “*la inevitabilidad de un compromiso entre la sostenibilidad ambiental y el progreso económico es el error más común*”, porque “*hay muchas oportunidades de inversión, y por lo tanto de aumentar la riqueza y el empleo en muchas zonas verdes*”.

Un breve repaso en perspectiva aclarará el alcance de esta cita. Hace cuarenta años, el Club de Roma abogó por un “*crecimiento cero*”/³. Su informe planteaba una gran cantidad de críticas, a menudo justificadas (porque los autores coqueteaban con Malthus), pero tenían la ventaja de decir lo que era evidente: la imposibilidad de un crecimiento material ilimitado en un mundo finito. Quince años más tarde, el Informe Brundlandt trató de resolver el problema proponiendo el concepto de desarrollo sostenible. Una respuesta inconsistente – no ponía en cuestión ni el productivismo inherente al capital ni a la burocracia de la URSS -, pero los límites estaban presentes, a través de la insistencia en el uso cuidadoso de los recursos. En Río de Janeiro en 1992, este énfasis se diluyó en la teoría de los “*compromisos inevitables*” entre los “*tres pilares*”. La “*economía verde*” representa un nuevo cambio: en adelante, en nombre del compromiso, dejemos hacer negocios, *business*. Como el capital se niega a respetar los límites de los recursos, que sean los recursos los que respeten las necesidades ilimitadas del capital.

El avance del concepto de economía verde es, pues, una victoria de los ideólogos neoliberales. Durante más de veinte años, han luchado contra la idea misma de los límites del desarrollo y contra la necesidad de “*compromisos*”

¹/ Véase en especial: Naciones Unidas, Estudio Económico y Social Mundial (2011). *La Gran Transformación basada en tecnologías ecológicas*, p. V.

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/2011wess_overview_sp.pdf

²/ PNUMA (2011). *Hacia una Economía Verde*, 2011. <http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/economia.php>

³/ *Los límites del crecimiento*, informe encargado al MIT por el Club de Roma y publicado en 1972.

“El capital no podrá alcanzar su paraíso verde a menos que los Estados le allanen el camino”

entre la economía y los otros “pilares”. Refiriéndose al pilar medioambiental, uno de sus argumentos es que la propiedad y la explotación capitalista de los recursos en un marco normativo claro garantizaría su uso ecológicamente sostenible y socialmente útil, abriendo así nuevas perspectivas económicas. El Banco Mundial pone en práctica estas ideas con entusiasmo a través de

sus diversos fondos y proyectos “verdes”. Recientemente, también ha publicado un informe⁴. El PNUMA se alinea completamente con esta doctrina.

En la base de este proyecto hay una evaluación económica: a juicio de algunos, el valor neto de estos “servicios” que la biosfera renta a la humanidad sería de alrededor de 33 billones de dólares. Ofrecida por Robert Costanza⁵ esta cifra es más que contestable; pero una cosa es cierta: si los “servicios” ambientales estuvieran en manos privadas y si los consumidores debieran comprarlos en el mercado, el Capital tendría ante sí un nuevo El Dorado.

Se puede, por ejemplo, imaginar que los bosques fueran totalmente privatizados y que los 7 000 millones de habitantes del planeta debieran pagar el “verdadero precio” de la absorción de CO₂ de los árboles. Conviene subrayar que este escenario no es política ficción: el “verdadero coste” ya se practica en el sector del agua, o cuando los propietarios de los bosques son remunerados por la captura de CO₂ en el marco de los mecanismo REDD y REDD+ de “lucha contra el cambio climático”...

Sin embargo, está lejos de estar todo tan claro. Surgen varias cuestiones. 1) Una proporción significativa de la industria verde, sólo es rentable potencialmente; la mayoría de las fuentes de energía renovables, en particular, no son competitivas en relación a los combustibles fósiles, y no lo serán en los próximos quince a veinte años. 2) Grandes masas de capital están bloqueadas en el sistema energético actual, donde las inversiones son a largo plazo; dos ejemplos: el costo total de reemplazar los combustibles fósiles y las centrales nucleares se estima entre 15 y 20 billones de dólares (¡entre un cuarto a un tercio del PIB mundial!), y las reservas probadas de combustibles fósiles - que forman parte de los activos de grupos de presión del carbón, el petróleo y el gas -son cinco veces superiores al presupuesto de carbono que la humanidad aún puede permitirse el lujo de quemar (la “burbuja de carbono”) ... 3) Una buena parte de los recursos naturales son bienes públicos que no pertenecen a nadie y no se pueden medir en términos monetarios.

⁴ World Bank.(2011). *Inclusive Green Growth : The Pathway to Sustainable Development*. http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=24368

⁵ Robert Costanza, uno de los fundadores de *Ecological Economics* publicó en 1997 en la revista *Nature* un artículo titulado «*The Value of the World's Ecosystems Services and Natural Capital*», que tuvo una gran repercusión. <http://www.robertcostanza.org/>

Privatización de los recursos

El capital no podrá, por lo tanto, alcanzar su paraíso verde a menos que los Estados le allanen el camino. El PNUMA lo afirma sin rodeos: *“Los sectores de las finanzas y la inversión controlan miles de millones de dólares y son capaces de proporcionar el grueso de la financiación”*. Sin embargo, la tasa de ganancia no es suficiente, por lo que *“la financiación pública es esencial para activar la transformación de la economía”*. Por lo tanto, *“el buen enfoque económico”* es llevar a cabo las *“reformas necesarias para liberar el potencial de producción y el empleo de una economía verde”*, que actuará *“como un nuevo motor y no como un retardador del crecimiento”*.

La privatización de los recursos es una prioridad en este programa de “relanzamiento”. Para el PNUMA, en efecto, *“la infravaloración, la mala gestión y, en última instancia, la pérdida”* de los *“servicios ambientales”* han sido *“provocados”* por su *“invisibilidad económica”*, que se deriva del hecho de que son *“sobre todo bienes y servicios públicos”*. Por consiguiente: si los bosques, el agua, el aire, la tierra, la luz solar, los bancos de pesca, la vida en general y la gestión de residuos se privatizaran por completo, sus propietarios deberían garantizar la sostenibilidad ecológica, ya que ésta condicionaría la sostenibilidad de sus beneficios y el “verdadero coste” impediría el consumo excesivo.

Así, el PNUMA pasa revista a todas estas áreas, señalando las políticas a decidir a fin de que los diversos elementos del “capital natural” se puedan transformar en mercancías, a expensas de la colectividad. En el sector del agua, por ejemplo, señala que *“la brecha entre la oferta general y la demanda es importante e insostenible, por lo que sólo cubierta por la inversión en infraestructuras y la reforma de las políticas del agua, es decir, el reverdecimiento del sector del agua. “Reverdecimiento”* significa aquí *“mejores sistemas de derechos de propiedad y de asignación de recursos, la generalización del pago de los servicios ambientales, reducir los subsidios al consumo y la mejora de la facturación del agua y su financiación”*. Todo está por llegar.

Pero no es sólo la privatización. La transición a una economía verde significa que los gobiernos deben

establecer las reglas de juego más favorables a los productos ecológicos, es decir, abandonar la fase de las subvenciones de otros tiempos, reformar sus políticas, adoptar medidas que incentiven, fortalecer la infraestructura de los mercados y los mecanismos económicos, reorientar la inversión pública y reverdecer los mercados públicos.

Toda una panoplia de reformas neoliberales ha sido ya preparada, desde el sistema de permisos de emisión canjeables hasta los pagos por servicios ambientales, pasando a través de la liberalización del comercio mundial. Como la economía verde debe ser competitiva y “rentable”, el programa también inclu-

ye la flexibilidad, la precariedad laboral, y la disminución de las “cargas sociales” – que serán compensadas con los impuestos medioambientales, tomando como ejemplo lo que se ha hecho en Alemania. Todo en nombre del empleo, por supuesto.

El futuro que no queremos

Tal como se presenta en los documentos de las instancias internacionales la economía verde representa un proyecto muy ambicioso que trata de dar una respuesta global al problema de la valorización del capital. Se trataría, por decirlo así, de generalizar el mecanismo de la renta inmobiliaria al conjunto de los “servicios ambientales” lo cual no es posible si los ecosistemas no son apropiados integralmente por las empresas, en el mundo entero. De repente, aparece un obstáculo suplementario, además de los citados anteriormente: las rivalidades geoestratégicas entre los Estados y grupos de Estados, en particular entre las potencias emergentes y los países capitalistas desarrollados. Exacerbadas por la crisis, estas rivalidades constituyen una traba mayor para cualquier acuerdo climático, digno de este nombre. Se puede decir que la negociación de un acuerdo global sobre los servicios ecosistémicos es aún más ilusoria.

Río+20 ha fracasado, dicen los comentaristas y no podía ser de otra manera. Frente a la crisis social y ecológica – que en última instancia, es en sí misma, una expresión de la crisis de las relaciones sociales capitalistas- el sistema no tiene nada más que proponer que el agotamiento (anunciado por Karl Marx) de las “*dos únicas fuentes de riqueza, la Tierra y el trabajo*”.

Río+20 es el mejor ejemplo del “futuro que no queremos”, aquel que lleva a la destrucción social y ecológica provocada por el capitalismo. El interés de los y las explotadas y oprimidas es bloquearla con su lucha ecosocialista, contraponiendo sistemáticamente a la lógica de la apropiación, del crecimiento y del beneficio, la lógica alternativa de los bienes comunes, del tiempo libre y de la satisfacción de las necesidades humanas reales, decididas democráticamente desde el respeto prudente a los ecosistemas.

Daniel Tanuro, ingeniero agrónomo y ecologista, es colaborador del periódico La Gauche

Traducción: Alfons Bech e Iñaki Barcena